

Argentina ante una encrucijada histórica

Alcira Argumédo

Aída Quintar

Introducción

LAS CONMOCIONES QUE AFECTAN A LAS NACIONES DE AMÉRICA LATINA, con rasgos particulares en cada una de ellas, dan cuenta del colapso de las estrategias restauradoras implantadas desde comienzos de la década de los setenta en la mayoría de nuestros países, principalmente a través de dictaduras militares. Utilizando el terrorismo de Estado, se logró quebrar todo tipo de resistencia política y social frente a la recomposición de la hegemonía de los Estados Unidos, que impondrá un giro decisivo a la dinámica económica y financiera y a la distribución de los ingresos en el continente. En los años ochenta, el Consenso de Washington evalúa que las dictaduras militares significan una amenaza para sus intereses, ya que tienden a generar movimientos de oposición que también cuestionan las políticas estadounidenses en las cuales se han respaldado —la revolución sandinista en Nicaragua y la islámica en Irán, ambas en 1979— o pueden tomar iniciativas capaces de desarticular los equilibrios geoestratégicos de esa potencia, como en el caso de la guerra de las Malvinas. Impulsará entonces nuevas formas de gobernabilidad mediante democracias restringidas y una reorientación en los modos de acumulación del capital bajo el signo de las concepciones neoliberales.

La magnitud de la crisis revela los límites encontrados por las políticas de concentración de la riqueza y polarización social, conjugadas con un acelerado crecimiento del endeudamiento externo y la privatización de los recursos públicos, cuya consecuencia ha sido el dramático incremento de la desocupación, la pobreza y la indigencia que golpean a una proporción mayoritaria de la población latinoamericana. Junto a la debacle económica y social, se agudizaron las dificultades de los sectores dominantes para garantizar la go-

bernabilidad de estas sociedades mediante la cooptación de las fuerzas políticas tradicionales. En los tres últimos lustros, la reinstauración de los gobiernos constitucionales en América Latina venía mostrando una dinámica donde el surgimiento de liderazgos y fuerzas políticas que alcanzaban un amplio apoyo era seguido, luego de un tiempo en el ejercicio del gobierno, por una acelerada licuación de esos consensos.¹ La causa esencial de este fenómeno fue la reiterada incapacidad para responder a las demandas mayoritarias, como consecuencia de la orientación de la política económica en función de las estrategias del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ejecutadas por las fuerzas políticas nacionales en favor de los grupos económico-financieros locales y externos, distorsionando las promesas electorales en perjuicio de sus propias bases sociales. Ello se acompañó de una vasta corrupción de dirigentes o funcionarios y de la constante apelación a un doble discurso, propagado por voceros del neoliberalismo en amplios espacios políticos y culturales, y en los medios de comunicación de masas controlados oligopólicamente.

Cuando en los últimos años este proyecto integral comienza a desarticularse, se define el escenario de una crisis orgánica, que va adquiriendo un alcance continental y marca una encrucijada histórica en el devenir de las sociedades latinoamericanas. Desde esta perspectiva, dentro del actual contexto se perfilan dos grandes opciones antagónicas: por un lado nuevas formas de organización y participación democrática, que responden a las aspiraciones populares y plantean una integración regional solidaria. Por otro, intentos de desestabilización económica, militar, política y/o social, impulsados por los sectores dominantes de los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, los grupos del capital más concentrado y fracciones sociales privilegiadas, que pretenden conservar su supremacía. La expresión de estos procesos adquiere características peculiares en las diferentes naciones; y si bien la crítica situación que hoy atraviesa Argentina, así como las alternativas para superarla, dependen principalmente de su dinámica interna, esta resolución no puede desligarse de la suerte del resto de América Latina y de una acción conjunta capaz de neutralizar las estrategias diseñadas para el continente por los centros de poder en la etapa que se abre.

¹ Entre otros, estos fenómenos se manifestaron en las experiencias de Alfonsín, Menem y De la Rúa en Argentina; Carlos Andrés Pérez y Calderas en Venezuela; Sarney y Collor de Melo en Brasil; y también en Perú, Ecuador, México y otros países (Quintar y Argumedo, 2000).

Antecedentes

El terrorismo de Estado impuesto por el golpe militar de 1976 consiguió aniquilar en la Argentina cualquier tipo de oposición política, social o cultural, disciplinando a la sociedad para impulsar un sistemático traslado de recursos públicos y sociales en beneficio de grupos económico-financieros locales y extranjeros, cuya consecuencia será una profunda redistribución de los ingresos en el país. En esos años, la alta disponibilidad de capital financiero internacional —que comienza a ofrecerse a muy bajo interés, dadas sus dificultades para encontrar canales de inversión en los países centrales en crisis— facilita un creciente predominio de la especulación financiera, que brinda beneficios mayores y más inmediatos comparada con la inversión productiva. La política económica promueve un proceso de desindustrialización en la mayoría de las ramas hasta entonces existentes, que tuvo graves consecuencias sobre el empleo, los salarios y la calidad general de vida de amplias capas de la población, creando bolsones de pobreza en los anteriores núcleos industriales de Rosario, Córdoba y el conurbano de Buenos Aires. La reforma financiera que acompaña esas medidas, permite consolidar el papel central de los grupos económico-financieros y de la especulación, cuyo accionar redundará en un creciente endeudamiento externo respaldado por el Estado. De este modo, el núcleo central de la acumulación capitalista y la obtención de ganancias se va a ir transfiriendo desde la producción para el mercado interno hacia la exportación, la especulación financiera y la fuga de capitales.

Un aspecto decisivo de los cambios estructurales generados por el gobierno militar, será el nuevo papel que se otorga al Estado con el objetivo de reforzar el proceso de concentración de la riqueza en favor de los principales grupos monopólicos. La administración central y las empresas estatales fueron desde entonces sometidas a un verdadero despojo por parte de estos grupos empresarios, a través de diversas medidas que incluyeron subsidios espurios, promociones a la industria y a la exportación, compras estatales con sobrepuestos exorbitantes, tarifas y tasas de interés diferenciales y similares. El sector público se convierte así en una bomba de succión de recursos sociales y nacionales para favorecer al nuevo bloque dominante, instaurando una dinámica económica que, bajo otras formas, continuará durante los tres gobiernos constitucionales que lo sucedieron (Azpiazú *et al.*, 1986). Ante la crisis del endeudamiento externo que estalla en toda América Latina en 1981, la estatización de la deuda externa privada —que garantizará el presidente del Banco Central, Domingo Cavallo, a instancias de la banca acreedora— redundará en una transferencia adicional de recursos hacia los capitales locales y externos más concentrados (Basualdo, 1992). En consecuencia, la expropiación de ingresos a

los trabajadores daría lugar a un serio incremento de los niveles de pobreza, que pasa del 7% de la población en 1970 al 27.5% en 1980, al mismo tiempo que la desocupación y la subocupación se convierten en componentes estructurales y permanentes de la economía del país (INDEC, 1984). De este modo, la dictadura consolida una transformación cualitativa de la sociedad argentina, mediante la implantación de un modelo económico socialmente regresivo, que mantendrá los lincamientos principales de una lógica de polarización social, concentración de la riqueza y subordinación económico-financiera del país, desde entonces hasta el estallido de la actual crisis.

En el contexto de las nuevas estrategias diseñadas por el Consenso de Washington, a fines de 1983 la reinstauración de la democracia permite el triunfo de Raúl Alfonsín, candidato de la Unión Cívica Radical. Tradicionalmente, este partido fue el representante de las clases medias en el país; pero en esas elecciones supera ampliamente sus bases históricas de sustentación al centrar su discurso en una enfática defensa de los valores democráticos. Después de un primer intento fracasado de privilegiar el crecimiento económico interno y la redistribución del ingreso, subordinando a estos objetivos el pago de los intereses de la deuda externa, el gobierno impulsa la llamada "economía de guerra". La reorientación de su estrategia, sintetizada en el Plan Austral de 1985, supone el reconocimiento de la profunda reestructuración del poder económico, al cual comienza a subordinarse desde entonces la acción política (Argumedo, 1987; Azpiazu y Basualdo, 1990). Si bien en ese mismo año el juicio por genocidio a las Juntas Militares despierta un amplio apoyo de la población, las medidas económicas generan un nuevo traslado de recursos hacia los grupos de poder dominantes, a través de subsidios, exenciones impositivas y otras prebendas. Pero esos inmensos recursos solamente van a incrementar la fuga de capitales, en tanto que los grupos beneficiarios eludieron sistemáticamente la inversión productiva en el país, ya que la especulación financiera continuó actuando como el elemento fundamental para la obtención de ganancias. El Plan Austral incluyó una disminución del gasto público social y tuvo como resultado el aumento de la desocupación, la subocupación y la precarización del trabajo junto a una caída del salario real (Quintar, 1989; Basualdo, 1992).

En 1987, frente a la presión de las fuerzas armadas para impedir la continuación de los juicios por genocidio —y a pesar de una gran movilización de masas que los apoya— el presidente Alfonsín plantea en el Parlamento las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que garantizan el resguardo de la impunidad militar. Esta decisión, unida al deterioro de la situación social, resta apoyo a la Unión Cívica Radical y en las elecciones legislativas de ese año el Partido Justicialista obtiene el triunfo en la mayoría de las provincias.

Por su parte, la confrontación entre los grupos económicos locales y la banca acreedora extranjera para mantener el lucro extraordinario proveniente de los recursos estatales dará lugar en 1989 a un proceso de hiperinflación que evidencia el límite encontrado por el vaciamiento patrimonial del sector público. El golpe de mercado que hace estallar la hiperinflación, inducido por un núcleo de bancos extranjeros, pone en evidencia la quiebra del Estado y se define una nueva política a instancias de los Estados Unidos y el FMI a través del Plan Baker, con el objetivo de garantizar el pago de la deuda mediante el patrimonio de las empresas y servicios más rentables del sector público (Basualdo, 1992). Sin embargo, no será el alfonsinismo el que lleve adelante esta política, ya que el temor producido por la hiperinflación, las presiones de la oposición justicialista, los paros sindicales contra el brusco descenso de los salarios y el deterioro de la imagen presidencial, terminan desintegrando el amplio consenso del 52% alcanzado en 1983. En las elecciones presidenciales de 1989 triunfa el Partido Justicialista encabezado por Carlos Menem (Quintar y Argumedo, 2000).

El Justicialismo recibió el voto masivo de la población marginada sumida en la desesperanza y la pobreza, con demandas y necesidades a las cuales el discurso modernizador y la acción del gobierno radical no ofrecían respuestas. En contraste, el discurso del candidato justicialista prometía un programa de recuperación productiva y reivindicación social. Sin embargo, al asumir la presidencia, Carlos Menem hace explícitos sus acuerdos con el poder económico-financiero e impulsa las leyes de Reforma del Estado y de Emergencia Económica que conforman el marco jurídico necesario para profundizar la reestructuración socioeconómica del país y llevar a cabo las líneas trazadas por el Plan Baker. Luego de una breve etapa en la cual fracasan las medidas destinadas a alcanzar la estabilización monetaria, a comienzos de 1991 se implementa el Plan de Convertibilidad de Domingo Cavallo, quien es designado como nuevo Ministro de Economía. Cavallo promueve una acelerada privatización del patrimonio público que permite el fortalecimiento adicional del poder económico local y los bancos acreedores, a los cuales se sumará la presencia de importantes operadores de origen europeo y nuevos capitales estadounidenses. Dada la escandalosa subvaluación de las empresas y los servicios estatales, así como las condiciones en que se realizaron los contratos, las privatizaciones significaron un nuevo traslado de recursos públicos hacia el capital extranjero asociado con los sectores monopólicos del capital nacional, en desmedro del resto de la sociedad (Lozano, 2002). Paralelamente se define una apertura total de la economía que afecta con dureza a las pequeñas y medianas empresas y a las economías provinciales, debido a la combinación desfavorable entre la eliminación de aranceles y un dólar

subvaluado, elevadas tasas financieras y altas tarifas en los servicios privatizados de energía, combustibles, telecomunicaciones, transporte, peajes. A la vez, el gobierno y los empresarios priorizan los salarios y los derechos sociales como variables de ajuste, aunque su incidencia es cada vez menor en los costos globales (Quintar, 1990; Beccaria, 1995).

La estrategia de Menem-Cavallo produjo una nueva etapa de desindustrialización con la quiebra o el cierre de numerosas pequeñas y medianas empresas industriales, comerciales, agrarias y de servicios; favoreciendo una concentración adicional en las diversas áreas de la actividad económica. Entre 1991 y 1994, el Plan de Convertibilidad resulta exitoso al controlar la inflación y garantizar una estabilidad monetaria con efectos positivos sobre el salario real, junto a la facilidad de obtener créditos para consumo o compra de viviendas. Pero a partir de 1995 la situación comienza a revertirse ante el aumento paulatino de los precios y de las tarifas en los servicios privatizados, mientras los ingresos salariales se mantienen congelados. Por su parte, el cierre de empresas y la racionalización del sector público agudizan la desocupación y la pobreza. Sin embargo, el menemismo consigue capitalizar el temor a la devaluación de la moneda y obtiene la reelección en 1995, ocultando que la estabilidad monetaria se sostenía al costo de un constante crecimiento de la deuda externa: si en 1991 la deuda era de 61 000 millones de dólares, en 1999 alcanza los 140 000 millones. Por entonces, el FMI y el Banco Mundial consideran al modelo argentino como el ejemplo a seguir, exaltando el milagro que significaba el supuesto crecimiento económico del país. En realidad, como resultante de diez años de gobierno menemista, Argentina se encuentra en una situación donde el grueso de sus exportaciones es de carácter primario o de ramas industriales con bajo valor agregado. La endeblez de la estructura exportadora y la creciente dependencia de las importaciones para el consumo interno o la producción, alimentaron los déficit en la balanza comercial y la de pagos que junto al déficit fiscal produjeron un círculo vicioso, obligando a sucesivos ajustes estructurales y a la necesidad de contraer créditos externos.

La magnitud de los montos involucrados en las privatizaciones permitió que la corrupción adquiriera una dimensión sin precedentes en la historia del país tanto en términos de extensión en diversas áreas de la sociedad como en lo referido al volumen de la riqueza pública expropiada. La conjunción entre la crítica situación macroeconómica y el agravamiento del deterioro social, la corrupción que inunda las más amplias esferas de la sociedad, las crecientes críticas y movilizaciones populares en demanda de justicia, transparencia y mayor equidad social, unidos a una obscena exhibición del despilfarro de "ricos y famosos" asociados al poder menemista erosionan la gestión de Me-

nem y el Justicialismo, habilitando el triunfo de la oposición en las elecciones presidenciales de 1999. La Alianza encabezada por Fernando de la Rúa y Carlos Álvarez que asume el gobierno en diciembre de 1999, se presenta como una última esperanza, en especial para las clases medias, el último muro de contención de un creciente descontento de la sociedad frente a los partidos políticos, cuyo accionar había legitimado la implantación del modelo neoliberal, distorsionando durante el ejercicio de sus funciones las promesas electorales y las demandas de quienes los habían elegido. Mientras que los representantes oficiales de las principales fuerzas políticas confluyen cada vez más estrechamente entre sí— borrando las diferencias entre el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical y el Frepaso—, se iría profundizando el abismo que los separaba de aquéllos a quienes supuestamente representaban. En el periodo de De la Rúa, la dinámica de licuación de consensos adquiere una especial celeridad: a cien días de haber asumido como presidente, su nivel de popularidad era del 86%; en menos de dos años, finaliza el mandato ante un masivo repudio de la población.

La catástrofe económica y social en cifras

Argentina enfrenta la crisis más profunda e integral de su historia contemporánea, manifestada agudamente en términos económicos, financieros, sociales, políticos, institucionales y en especial como una crisis de los valores que rigen las modalidades de relación social y de organización de las sociedades. Un breve contraste entre las cifras del periodo anterior a la dictadura de 1976 y las de 2001/2002 permite apreciar lo que significó para el país la aplicación de las políticas impuestas por el FMI y el Banco Mundial, como organismos vicarios de las corporaciones y la banca transnacional. Mientras en 1975 la deuda externa era de 7 800 millones de dólares, a comienzos de 2002 ronda los 170 000 millones, a pesar de que entre 1983 y 2001 se pagaron unos 150 000 millones en concepto de amortizaciones, intereses y servicios (Juliá, 2002). Al mismo tiempo, desde 1991 se enajenó el 90% del patrimonio público de empresas industriales y de servicios, así como la mayor parte de los recursos naturales estratégicos (principalmente petróleo, gas y minería). El endeudamiento y la alarmante situación económico-social a la que se arribó fue acompañada de un inédito proceso de concentración, tanto en el sector financiero como en la producción agropecuaria, extractiva, industrial y de servicios, en la comercialización interna e internacional y en los medios de comunicación e información.

A partir de 1991, el Plan de Convertibilidad con una paridad cambiaria basada en un dólar barato permitió obtener ganancias extraordinarias en dóla-

res a las empresas privatizadas y a los bancos —cuyas tasas de interés más que triplicaban el nivel internacional y significaron obstáculos insalvables para la producción nacional—. Como consecuencia, se genera un proceso sostenido de desindustrialización que retrotrae al país a las etapas del perfil agroexportador, anterior a la segunda posguerra. Ello redonda en la caída del Producto Bruto Interno (PBI) anual per cápita que, en el 2002, es un 23% inferior al de 1975, ubicando a Argentina en uno de los puestos inferiores del continente (Lozano, 2002). La desindustrialización y la concentración económica afectaron particularmente a las pequeñas y medianas empresas industriales, agropecuarias, comerciales y de servicios, en las cuales trabajaba la mayor parte de la población económicamente activa, nutriendo un incremento sostenido de la desocupación. En 1974, Argentina mantenía niveles históricos de desempleo que rondaban el 3%; a mediados de 2002 la desocupación abierta supera ampliamente el 20% y una proporción similar corresponde a la subocupación, que es una forma de desempleo disfrazado. A estas cifras deben agregarse los trabajadores “desalentados” y los beneficiarios de los diversos programas de subsidio para la población carenciada (equivalentes a unos 45 dólares mensuales para familias con un promedio de 5 miembros). La desocupación se combina con un deterioro de las condiciones de trabajo, derivado de las leyes de flexibilización: en 1974, cerca del 90% de los trabajadores tenía una cobertura casi plena de los derechos sociales (estabilidad, indemnizaciones por despido, seguridad social, aguinaldo, vacaciones, subsidios por accidentes, salario familiar, entre otros) mientras que en la actualidad no más del 25% conserva esos beneficios.

El crecimiento de la pobreza fue la consecuencia necesaria de estas medidas. En 1974, la población argentina en condiciones de pobreza rondaba el 7%; en 2002 esa proporción alcanza al 53% de los habitantes, a lo cual debe sumarse un 20% situado inmediatamente por encima de la línea de pobreza y otro 20% que ha sufrido un marcado descenso de sus ingresos y niveles de vida (Minujin, 1985; INDEC, 2002). Por lo tanto, es posible concluir que estas políticas han afectado negativamente a más del 90% de los habitantes. Debido a la decisiva disminución de sus ingresos, una importante fracción de los ocupados se encuentra hoy bajo la línea de pobreza: el salario real promedio en 2002 es 66% inferior al de 1974/1975. Esta degradación de las condiciones de vida de la población se da en el marco de una creciente polarización social: en 1974, el 10% por ciento más rico de los perceptores de ingresos recibía 12 veces más que el 10% más pobre; en 2002 la diferencia llega a 30 veces.²

² Datos provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC; Jubileo (2000); y Lozano (2002).

En síntesis, las políticas económicas promovidas desde el gobierno militar hasta el presente golpearon duramente tanto a los sectores de menores ingresos como a las clases medias que conforman los llamados *nuevos pobres* e incluso a una parte de antiguos privilegiados. La desindustrialización del país, especialmente en la última década, afectó a los obreros; pero también a medianos empresarios, altos ejecutivos, profesionales, técnicos y empleados de mayor nivel de la producción, el comercio y los servicios. La situación se agrava aún más, al tomar en cuenta la degradación del sistema educativo en todos sus niveles, de la atención de la salud, de los planes de vivienda y hábitat, del mantenimiento de los servicios de infraestructura urbana y rural, y de otros múltiples aspectos que indican un inédito proceso de decadencia. Es preciso remarcar que estos resultados se deben a la sistemática aplicación de las medidas del FMI y el Banco Mundial que, como representantes de las grandes corporaciones, han venido desempeñando en forma cada vez más explícita el poder real que guía la orientación de la política argentina.

La crisis política e institucional

El gobierno de Fernando de la Rúa

Si bien durante los meses iniciales del gobierno la sociedad mantenía fuertes expectativas en lo relativo al compromiso de erradicar la corrupción, las primeras medidas socioeconómicas —en particular, la disminución de los montos de ingresos personales que debían pagar impuestos, la nueva ley de flexibilización laboral y la rebaja de un 12% a los trabajadores estatales— comenzaron a generar cierto malestar entre sus principales bases sociales de apoyo (Quintar y Argumedo, 2000). En mayo, se realiza un paro general de protesta, aunque en las elecciones para jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizadas en esos mismos días, el oficialismo supera el 50% de los votos, evidenciando que aún mantiene un significativo apoyo. Meses más tarde, la situación política comienza a deteriorarse debido a las denuncias vinculadas con el pago de sobornos en el Senado para lograr la aprobación de la ley de flexibilización laboral. Las sospechas involucran a senadores peronistas y radicales; pero asimismo afectan a funcionarios pertenecientes al círculo más íntimo del presidente. En su carácter de autoridad máxima del Senado, el vicepresidente Álvarez impulsa la investigación de esas denuncias, como una forma nacional de “mani puliti” tendiente a erradicar la corrupción en los ámbitos legislativos, pero esos intentos son resistidos por el propio De la Rúa. En septiembre de 2000, nuevas sospechas sobre casos de soborno en el Senado vinculadas

con una ley de hidrocarburos y las manifestaciones contra la política económica, aumentan las tensiones entre las dos principales cabezas del Poder Ejecutivo. Esto resquebraja las relaciones internas de la Alianza llevando a la renuncia del vicepresidente Álvarez y a una reestructuración del gabinete.

El deterioro político del gobierno se combina con la agudización del proceso recesivo y el país se encuentra en riesgo de caer en una cesación de pagos del endeudamiento externo, mientras pelagra el Plan de Convertibilidad con la paridad entre el peso y el dólar. Considerando que ese riesgo podía desatar un efecto dominó en otras naciones de América Latina —en especial luego de la crisis sufrida por Turquía— a fines del 2000, el Tesoro de los Estados Unidos será uno de los principales impulsores de un préstamo cercano a los 40 000 millones de dólares. Este préstamo fue coordinado por el FMI con el objeto de cubrir los vencimientos de la deuda externa en el año 2001, ratificar la vigencia del Plan de Convertibilidad, bajar las tasas de interés financiero y recrear un mejor clima de inversiones. Las condiciones requerían un ajuste adicional de los presupuestos provinciales, la desregulación de las obras sociales sindicales para favorecer el papel de la medicina privada, y la aprobación de una reforma jubilatoria, asimismo orientada a privatizar el conjunto del sistema de seguridad social. En diciembre del 2000, con la finalización del gobierno demócrata de Bill Clinton y su reemplazo por George W. Bush se produce una inversión de alianzas económicas dentro de los Estados Unidos y se redefinen todos los ejes políticos internos e internacionales. En ese contexto, a partir de las investigaciones realizadas por el Senado de los Estados Unidos sobre lavado de dinero en bancos norteamericanos y paraísos fiscales, en febrero de 2001 la Procuración General del Tesoro en Argentina presenta a la Justicia un pedido de investigación sobre casos similares en nuestro país que involucra a funcionarios vinculados con el gobierno menemista por haber ocultado información acerca de un caso que comprometía al Federal Bank. Desde 1996, esta entidad “pantalla” establecida en las islas Bahamas se dedicaba al lavado de dinero en triangulación con el Citibank de Nueva York y el Banco República en la Argentina, y se sospecha que una parte importante de esos montos provenían de los procesos de privatización durante la gestión de Carlos Menem. Mientras tanto, la recesión de la economía argentina continúa agudizándose y se evidencia el fracaso de la esperada reactivación económica que, según el gobierno, ayudaría a paliar los niveles de desocupación y pobreza. La disconformidad social aumenta provocando la renuncia del Ministro de Economía, José L. Machinea, y un nuevo cambio de gabinete en marzo del 2001.

El efímero pasaje de Ricardo López Murphy como nuevo ministro del área económica, con sus propuestas enmarcadas en una dura ortodoxia de

ajuste y en la decisión de mantener la Convertibilidad, incrementa aún más el descontento social y los distintos agrupamientos de trabajadores ocupados y desocupados, estudiantes y diversas organizaciones comunitarias, confluyen en una movilización nacional de repudio. Ante la magnitud de la protesta social, De la Rúa desplaza a López Murphy designando a Domingo Cavallo. Sin embargo, la reaparición de esta figura en el escenario político argentino y los superpoderes que logra obtener del Parlamento ponen en evidencia las líneas de continuidad de la hegemonía de los grupos económico-financieros desde la dictadura militar hasta el gobierno de la Alianza. El ministro lanza un plan destinado a reactivar algunos sectores de la industria y adopta una canasta de monedas con el fin de flexibilizar el tipo de cambio, que viene perjudicando gravemente la producción y las exportaciones del país. A dos meses de haber asumido el cargo, la situación argentina continúa deteriorándose y la presión del pago de servicios e intereses de la deuda lo llevan a formular el llamado *megacanje*. Esta política implicaba cambiar los bonos de la deuda externa con vencimiento a corto plazo, por otros con mayor plazo pero a tasas de interés mucho más altas. Paralelamente, con el objetivo de revertir la baja credibilidad en la capacidad de pago de la Argentina —puesta de manifiesto en el constante incremento del *riesgo país*— Cavallo implementa el Plan Déficit Cero de acuerdo con los requerimientos del FMI.

La Ley de Déficit Cero especificaba que la recaudación del Estado en concepto de impuestos y otros rubros sería destinada, en primer lugar, al pago de los intereses de la deuda, y recién con los recursos sobrantes se iban a abonar los salarios públicos, las jubilaciones y demás gastos, que debían sufrir los recortes necesarios para garantizar el equilibrio de las cuentas públicas. A partir de esas definiciones se reducen en un 13% los sueldos estatales y las jubilaciones, afectando nuevamente la capacidad de gasto de la población. Pero en tanto la estructura impositiva de Argentina está basada casi totalmente en la recaudación sobre el consumo, y la estrategia no contempla afectar los intereses de los sectores más concentrados aumentando sus impuestos, al caer el consumo de masas y sus correspondientes aportes, bajan los ingresos estatales y el déficit crece en forma sostenida. Dado el fracaso del Déficit Cero, las deudas comenzaron a pagarse con las reservas del Banco Central, incrementando las amenazas de una devaluación o de la declaración de un *default*. En los mismos días del atentado a las Torres Gemelas, Cavallo anuncia la aprobación de nuevos empréstitos con el fin de tranquilizar a los depositantes que habían comenzado a retirar su dinero, favoreciendo una fuga de divisas protagonizada principalmente por los sectores más concentrados de la economía y los capitales especulativos, con la complicidad del Banco Central.

Por entonces la recesión llevaba cuatro años seguidos y, entre otros aspectos, había producido una marcada destrucción de capital industrial: más del 50% de la capacidad instalada del sector permanecía inactiva y el cierre temporal de plantas se va iba sustituyendo por clausuras definitivas, que se traducen en suspensiones o despidos de trabajadores. La crisis se extiende a sectores cada vez más amplios y el malestar se manifiesta con contundencia en las elecciones parlamentarias de octubre de 2001, a través de un ausentismo inédito y una alta proporción de votos en blanco o expresamente anulados —fenómeno conocido como *voto bronca*— cuyas cifras superaron en muchos lugares a las obtenidas por el candidato ganador: en la ciudad de Buenos Aires alcanzó alrededor del 30% convirtiéndose en la primera minoría y en otras grandes ciudades subió a más del 40%. A pesar de estar dividida, la izquierda obtuvo su mejor elección en muchos años. Los grandes perdedores fueron el gobierno de la Alianza y, en segundo lugar, el peronismo que, si bien obtuvo una mayoría relativa, también perdió una importante masa de votantes en términos absolutos.

El fracaso del plan y las reticencias del FMI para otorgar una nueva ayuda agudizan la inestabilidad económica, mientras continúa creciendo el *riesgo país* y la fuga de depósitos. Las tasas de interés interbancarias llegan al 250%, y Argentina se encuentra nuevamente al borde de la cesación de pagos. El 1 de diciembre de 2001, Cavallo impone un congelamiento de los depósitos bancarios que afectará especialmente a más de tres millones de pequeños y medianos ahorristas. La crisis social redonda en una marcada caída de las ventas tanto en los artículos de primera necesidad como en aquéllos característicos del consumo de las clases medias. Entre el 14 y el 17 de diciembre, el Frente Nacional Contra la Pobreza (Frenapo) realiza una Consulta Popular no vinculante sobre la necesidad de crear un salario de ciudadanía mediante un seguro de empleo y formación a trabajadores desocupados y alcanza un apoyo que supera los tres millones de votos. En esos mismos días, los movimientos de trabajadores desocupados realizan cortes de ruta en demanda de alimentos o subsidios y comienzan saqueos a supermercados en varias ciudades del interior del país, que el 18 de diciembre se extienden a toda la periferia metropolitana. Desoyendo cualquier reclamo, Cavallo anuncia un nuevo plan de ajuste.

“¡Que se vayan todos!”

Durante las primeras horas del 19 de diciembre, los saqueos se generalizan en el conurbano bonaerense y llegan a la Capital Federal; se arrasa con supermercados, pero también con pequeños y medianos comercios, creándose

un clima de aguda turbulencia social. La acción de la policía tiene como resultado la muerte de tres personas, y esa noche el presidente De la Rúa pronuncia un discurso que, ignorando una vez más el malestar ante la dura realidad económica y social, se limita a declarar el Estado de Sitio. El discurso presidencial actúa como detonante de una indignación contenida y al finalizar la transmisión en la ciudad de Buenos Aires comienza a sonar el golpe de cacerolas. Una multitud se vuelca espontáneamente a las calles, concentrándose en la Plaza de Mayo, en los alrededores del Congreso de la Nación y frente al domicilio de Cavallo. En la madrugada del 20, se conoce la renuncia del ministro, y desde muy temprano, distintos puntos de la ciudad, en especial la Plaza de Mayo, vuelven a ser ocupados por miles de manifestantes que expresan su rechazo al gobierno. En una demostración final de su ceguera, desde el Poder Ejecutivo se lanza la orden de reprimir: a lo largo de esa jornada se suceden los enfrentamientos callejeros entre manifestantes y policías, con un saldo de treinta muertos. Al día siguiente, el presidente y todo su gabinete presentan la renuncia. La contraparte de este desgaste del gobierno fue el crecimiento de nuevas formas de expresión de las demandas sociales al margen de los partidos políticos y del sindicalismo tradicional aliado de los oficialismos de turno. En los dos años que separan el inicio de la gestión de la Alianza del estallido social de diciembre, se sucedieron diversas manifestaciones. El carácter de estas protestas indicaría que la crisis de representatividad de los partidos y de los sindicatos tradicionales no se debe a una falta de interés en la política, sino a un duro rechazo hacia la acción de los supuestos representantes, a los dobles discursos, a la corrupción, a la impunidad y a las prácticas en las que la sociedad sólo participa durante las contiendas electorales —optando casi siempre por el mal menor— sin que esa participación tenga una real incidencia en la toma de decisiones sobre los problemas que la afectan.

Con el retorno de la democracia y la vigencia de las nuevas libertades —en particular las de prensa y expresión, largamente proscriptas— se había producido un importante aumento de la participación ciudadana. Sin embargo, al poco tiempo se inicia un proceso inverso y la ciudadanía se retira del espacio público, crecientemente monopolizado por las instancias representativas. La idea de la política como espectáculo invade a la sociedad, refugiada frente a los televisores, recibiendo pasivamente aquello que los funcionarios de la política y los voceros neoliberales le quieren transmitir. La atomización social como consecuencia de ese repliegue, reforzado más tarde por la desocupación y precarización laboral, permitió que el discurso de los medios de comunicación incidiera en la imagen de los políticos, en la orientación de las ideas y en el silenciamiento de las propuestas y las prácticas so-

ciales críticas, de modo tal que fueron teniendo un alto peso relativo en las opiniones de los ciudadanos. Si el *voto bronca* fue el primer indicio de la decisión de romper con el papel de espectadores, expresada en su negativa a elegir representantes, esa ruptura se profundiza en las jornadas de diciembre con la demanda masiva: *¡Que se vayan todos!* Si bien en esos días la movilización muestra rasgos aparentemente espontáneos también confluyen en ella organizaciones y movimientos sociales que se habían venido desarrollando durante el periodo anterior. Lo que cuestionan es tanto la representatividad política parlamentaria como el conjunto de instituciones económicas, políticas y jurídicas consideradas corruptas. A pesar de que en la historia política argentina hubo casos y sospechas de corrupción, lo nuevo que se va conformando desde fines del gobierno de Alfonsín y en particular durante el menemismo es una *estructura de corrupción* en la cual se articulan los grupos económico-financieros locales y externos más poderosos; una corporación político-sindical constituida por partidos y sindicatos que se entrelazan entre sí, ocupando los poderes Ejecutivo y Legislativo con la complicidad de un Poder Judicial encabezado por la Corte Suprema.

Durante la dictadura militar, el comportamiento fraudulento de los grupos económico-financieros se había respaldado en la capacidad represiva de las fuerzas armadas también impregnadas por la corrupción, como mostrarían los múltiples casos de apropiación de bienes de los detenidos-desaparecidos, asesinados o encarcelados. Por el contrario, con la reinstauración democrática la nueva *estructura de corrupción* logró legitimarse a través del control de los medios de comunicación y de un “discurso único” enunciado por periodistas, comunicadores e intelectuales orgánicos del régimen. Estos intelectuales fueron cuadros que tradicionalmente apoyaban las posiciones más conservadoras, a los cuales se incorporaron franjas políticas e intelectuales provenientes de un activismo de corte popular que, mediante una supuesta modernización, realizaron un drástico giro respecto de sus antiguas convicciones. En los años ochenta, la legitimación política e ideológica de la *estructura de corrupción* se hizo en nombre de las ideas neoliberales que comenzaban a expandir su hegemonía en el marco de la crisis del marxismo, y desde 1990 se refuerza con la caída del muro de Berlín. La reproducción del discurso legitimador del modelo neoliberal operó además a nivel de los expertos contratados por los bancos multilaterales en diversas áreas de gobierno y a través del financiamiento de organizaciones no-gubernamentales más directamente vinculadas con los proyectos en áreas de las políticas sociales focalizadas. En este campo, las modalidades de acción predominantes tendieron a poner en práctica un asistencialismo tecnocrático que muchas veces llegó a combinarse con mecanismos de clientelismo político.

La corrupción también penetró en estamentos directivos, docentes e investigadores de las universidades y otros ámbitos culturales. Mediante sutiles formas de complicidad, estas orientaciones alimentaron la elaboración y legitimación del discurso único del poder en sus distintas expresiones. La hegemonía ideológica alcanzada en los espacios universitarios se combinó con el papel de los financiamientos para institutos de investigación en Ciencias Sociales o Físico-Naturales, gracias al condicionamiento que supone la temática a estudiar, el tipo de abordaje de los problemas, la metodología empleada y hasta el lenguaje a ser utilizado en los informes y conclusiones. Otra de las consecuencias en el campo académico, fue la creciente mercantilización de las prácticas políticas del movimiento estudiantil vinculado con los partidos mayoritarios, mediante la distribución de cargos y prebendas, que produjo una grave deformación en las tradiciones universitarias y un tipo peculiar de clientelismo académico.

La *estructura de corrupción* va a garantizar su eficacia a través de dos formas principales de expansión. Una que se reproduce en las provincias, donde participan sectores económicos, partidos políticos nacionales o provinciales e instituciones judiciales, cumpliendo el papel de nódulos territoriales del poder central con el cual mantienen distintos vínculos. En la mayor parte de las jurisdicciones, este poder se sustenta en antiguas modalidades de dominación patrimonial ahora modernizadas, donde predominan líneas familiares tradicionales o caudillismos que se consolidaron al finalizar la dictadura militar. Por su parte, la “mano de obra desocupada” de los que participaron en las prácticas genocidas de la dictadura y un importante sector de las fuerzas de seguridad del Estado protagonizan hechos delictivos o facilitan la acción de bandas con las que comparten, en diversos grados, el botín proveniente del tráfico de drogas, robos, asaltos, secuestros y similares. Estos sectores están en su gran mayoría respaldados por las *estructuras de corrupción* nacionales o provinciales con las que intercambian favores de impunidad. La otra forma produce una expansión capilar de carácter vertical que va penetrando distintos estamentos del tejido social imponiendo una cultura de corrupción que se esparció desde las máximas estructuras del poder hasta los ámbitos cotidianos. A pesar de su inicial ambigüedad, la consigna “¡Que se vayan todos!” permitirá ir formulando un duro cuestionamiento a esta *estructura de corrupción* y una crítica a los fundamentos ideológicos del neoliberalismo, contraponiéndoles los valores de una ética solidaria.

El estallido de diciembre: respuestas desde el poder

Adolfo Rodríguez Súa

Ante la extrema debilidad de la Alianza, el peronismo se transforma en la principal fuerza partidaria del escenario político, pero también se profundizan las contradicciones entre sus principales líneas internas. Luego de complejas negociaciones, Adolfo Rodríguez Súa, gobernador de San Luis, es nombrado presidente provisional con el compromiso de convocar a elecciones generales en un plazo de sesenta días. No obstante, la protesta de los ahorristas contra los bancos que no liberan sus depósitos, el temor a una devaluación y el rechazo a integrantes del gobierno sospechosos de corrupción confluyen en nuevas manifestaciones masivas, al tiempo que los representantes justicialistas del Parlamento se niegan a apoyar al presidente provisional. La conjunción de estos factores y la creciente inestabilidad política debilitan esa fugaz presidencia, y Rodríguez Súa debe renunciar a sólo una semana de haber asumido el cargo.

Eduardo Duhalde

El 1 de enero de 2002, la Asamblea Legislativa nombra como presidente al senador Eduardo Duhalde. Dos días después, Argentina entra formalmente en cesación de pagos y se elimina la Ley de Convertibilidad, lo cual significa una devaluación de la moneda sin que se haya resuelto el congelamiento de los depósitos. Mientras tanto, comienzan a cobrar mayor virulencia los conflictos entre los distintos componentes de la *estructura de corrupción*, en especial entre el Poder Legislativo y la Corte Suprema de Justicia. Las movilizaciones callejeras continuaban cobrando fuerza y el 28 de enero de 2002 se realiza por primera vez una marcha conjunta de piqueteros con vecinos, comerciantes y asambleístas de la Capital Federal. En esa marcha surge la consigna: "*Piquete y cacerola, la lucha es una sola*" en la que se articulan las demandas respectivas de las clases medias y populares. La solidaridad entre estos dos sectores tiene un significado muy especial en la política argentina si se tiene en cuenta la historia de enfrentamientos y desencuentros políticos y culturales que se produjeron entre ellos en el transcurso de los últimos cincuenta años, expresados principalmente en la tradicional oposición entre peronistas y radicales.

El gobierno debe enfrentar además las presiones de los capitales más concentrados —cuyos conflictos internos también se han agudizado con la

devaluación— y los condicionamientos del FMI para otorgar un nuevo crédito que permita al país salir de la cesación de pagos. En vez de arbitrar en la disputa entre las distintas fracciones del bloque dominante, el gobierno potenció la crisis económica y social al concederle a cada una lo que reclamaba. Las sucesivas decisiones redundaron en favor de las mismas empresas que se habían venido beneficiando con la política económica instaurada desde la dictadura militar y vuelven a recibir importantes beneficios a expensas de los recursos públicos y los ingresos populares. La decisión de ceder a las presiones de los capitales concentrados y a las imposiciones del FMI evidencian que este gobierno no está dispuesto a arriesgar su permanencia enfrentándose con el bloque de poder hegemónico. La consecuencia de esta posición es el creciente rechazo de la sociedad hacia la figura presidencial y los políticos en general, expresado en una sucesión de *escraches*, movilizaciones, marchas, protestas de ahorristas. En un principio el gobierno intenta descomprimir las tensiones mediante gestos como el encarcelamiento de Cavallo por sus vínculos con el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador pretendiendo demostrar una fuerte voluntad política de condenar la corrupción y terminar con la impunidad. Pero poco después los temas de la seguridad y la represión comienzan a cobrar una importancia cada vez más marcada en el discurso y la acción de distintos voceros gubernamentales. *En esa línea se fue alimentando un clima en el que se hacía referencia a las amenazas de guerra civil, subversión o desbordes, de modo tal que permitiera legitimar una escalada represiva para neutralizar la movilización social.*

El 26 de junio de 2002 se desata una violenta represión contra una marcha de piqueteros en el límite entre la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. El modo de actuación de las fuerzas provinciales coordinadas con las nacionales de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, evidencia que se trató de una emboscada y no habría existido ningún exceso imprevisto: claramente aparecía como un mensaje que anunciaba la posibilidad de reproducir los procedimientos de la dictadura militar. En respuesta, se realiza una concentración multitudinaria en la Plaza de Mayo condenando la muerte de dos piqueteros y la evidente escalada represiva que frustra el intento de los medios por imponer la versión oficial, según la cual la violencia se desata debido a un enfrentamiento entre piqueteros, en tanto que diversas pruebas demostraron cabalmente que los jóvenes fueron asesinados por altos jefes policiales vinculados con el partido gobernante. En las siguientes semanas se sucedieron las marchas de repudio, convocando a un muy amplio espectro de organizaciones sociales y políticas de diversas ciudades del país y, como el 19 y 20 de diciembre, evidenciaron la resistencia de un importante sector de la sociedad argentina frente a los intentos de reimplantar políticas de represión.

Poco más tarde, Duhalde anuncia elecciones anticipadas para presidente y vicepresidente, eludiendo la demanda masiva que reclama un cambio total de las dirigencias políticas involucradas en el gobierno y en la oposición, a nivel nacional, provincial y municipal. El llamado a elecciones pretende realizar solamente un recambio en el Poder Ejecutivo que dejaría intacta la *estructura de corrupción* en lo referido a los grupos económico-financieros, a la corporación política aferrada a sus cargos de diputados y senadores en el Parlamento nacional y en las provincias, así como la continuidad de la Corte Suprema de Justicia. De este modo, si una nueva fuerza política lograra alcanzar la presidencia, el Poder Ejecutivo quedaría prisionero de esa estructura, limitándolo casi totalmente en su capacidad de acción. Esto ha generado un importante rechazo por parte de las fuerzas sociales movilizadas contra la política económica y su modelo de gobernabilidad, aunque aún no cuentan con la suficiente fortaleza para obligar a cumplir la demanda de “¡Que se vayan todos!”.

Junto a los intentos de controlar la protesta social y recomponer la hegemonía en el contexto de la agudización de la crisis económica, social y política, la estrategia de los grupos económico-financieros tiende a evitar el peligro de una eventual llegada al gobierno de los denominados partidos “populistas”. De acuerdo con el documento *Santa Fe IV*, elaborado por uno de los grupos neo-conservadores³ que asesoran al actual presidente George W. Bush, toda fuerza política opuesta al predominio de las concepciones neoliberales constituye una grave amenaza populista. Tales indicaciones formulan serios interrogantes para Argentina y el resto de América Latina en tanto que vuelven a resurgir, como a principios de los años setenta, ciertas ideas que hablan de la preocupación acerca de un supuesto *exceso de democracia* en nuestros países.⁴ Esas tesis fundamentaron en su momento la imposición de dictaduras militares en gran parte de nuestras naciones; desde mediados de los ochenta, las propuestas del Consenso de Washington promovieron un retorno a democracias claramente restringidas por el carácter excluyente de las políticas económicas que implementaron esos gobiernos. Es posible preguntarse entonces si la actual preocupación manifiesta en el documento *Santa Fe IV* por un supuesto *exceso de democracia* de gobiernos “populistas” está alimentando estrategias que nuevamente contemplan intentos de intervenciones militares.

³ Este documento del año 2001 constituye la continuidad de los conocidos documentos *Santa Fe I* de 1982 y *Santa Fe II* de 1988, elaborados por equipos de asesores de los presidentes Ronald Reagan y George Bush.

⁴ En 1975 la Comisión Trilateral publica: “La crisis de la democracia. Informe sobre la gobernabilidad de las democracias” cuyos autores fueron el francés Michel J. Crozier, el japonés Joji Watanuki y el norteamericano Samuel Huntington. La hipótesis central del trabajo afirma-

El nuevo protagonismo político y social

A pesar de la heterogénea composición social de los protagonistas y del carácter espontáneo de los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001 —donde fue evidente la participación de sectores de las clases medias de la ciudad de Buenos Aires que hasta entonces venían mostrando una especial pasividad—, la multitud se une al son de las cacerolas con la consigna “*¡Que se vayan todos!*”. La interpretación literal de esta consigna contrasta con la complejidad y diversidad de significados y con el alcance que los distintos sectores otorgan al término “*todos*”. Este será precisamente uno de los ejes centrales del debate, ya que en sus inicios algunos parecían restringirlo a la corporación política y a la Corte Suprema de Justicia; pero después irá incluyendo a los bancos, a las empresas privatizadas, al FMI y a los multimedia que pretenden continuar legitimando el modelo económico. El cuestionamiento ha ido adquiriendo de este modo un carácter integral que abarca lo político, lo económico, lo institucional y lo cultural; la consigna adquiere mayor consistencia al enmarcar la crisis de representatividad en la búsqueda de definiciones acerca del tipo de sociedad a la cual se aspira, a las nuevas formas de organización y toma de decisiones del sistema político e institucional, a las estrategias económicas y a la inserción de la Argentina en el escenario internacional. Pero, la complejidad se manifiesta también en la heterogeneidad de los actores sociales que, a pesar de los avances alcanzados en los últimos tiempos en términos de recomposición de los lazos de solidaridad y en la construcción de redes entre diversos espacios de organización, aún no han encontrado formas de confluencia que les permitan articularse alrededor de un proyecto alternativo común.

La carencia de credibilidad en el sistema de representación política es el resultado de un proceso de distanciamiento entre las mayorías sociales y los partidos que se fue profundizando en las dos últimas décadas. En el transcurso de este periodo, la relación entre la sociedad y la política fue asumiendo diversas modalidades, condicionadas por las formas predominantes de gobernabilidad y el desarrollo político-institucional del país. Durante los primeros años de la dictadura iniciada en 1976, signados por la proscripción de los partidos políticos y sindicatos en el marco del terrorismo de Estado, los movimientos sociales que surgen se orientan principalmente a la reivindicación de los derechos humanos. El fenómeno de las Madres y Abuelas de Pia-

ba que los países industrializados estaban enfrentando problemas de gobernabilidad debido a que un *exceso de democracia* habría afectado negativamente ‘las desigualdades en autoridad y las distinciones en función’ necesarias para la organización de las sociedades. (Nun, 2000)

za de Mayo destaca desde 1977 por su coraje y ejemplo moral. Unos años más tarde, los jóvenes nucleados alrededor del rock nacional manifestaban en los festivales —uno de los escasos lugares donde podían reunirse masivamente— su rebeldía ante el autoritarismo que impregnaba a la sociedad. A principios de los ochenta, otras expresiones de resistencia fueron las procesiones a la iglesia de San Cayetano (patrono del trabajo), culminando en la masiva movilización del 30 de marzo de 1982, como primera demostración de fortaleza del acuerdo multisectorial entre los partidos y los sindicatos aún proscritos. A su vez, en el Gran Buenos Aires se producen protestas barriales contra las políticas de restructuración del gasto social de los municipios y las presiones tributarias. La crítica situación social creada por la desindustrialización llevó a la creación de grandes bolsones de desempleo y pobreza en el conurbano bonaerense y dará origen al fenómeno de los asentamientos urbanos —la toma de tierras para vivienda por parte de organizaciones que agrupaban entre 2 000 y 3 000 familias cada uno— cuya extensión los convierte en uno de los movimientos de mayor alcance. Los asentamientos evidencian el crecimiento de la pobreza entre amplias capas sociales; y también son consecuencia de las políticas de “limpieza” destinadas a erradicar a la población de menores recursos de la ciudad de Buenos Aires —que vivía en villas miserias, conventillos y hoteles de inquilinato— hacia los bordes suburbanos.

Con la recuperación del estado constitucional aflora nuevamente la actividad política y sindical, en la que va a canalizarse una gran parte de las manifestaciones de resistencia que en el periodo anterior se expresaban a través de los movimientos sociales. Sin embargo, la paulatina reorientación “modernizante” de los partidos mayoritarios —en realidad, un vuelco hacia las estrategias económicas de los grupos de poder— provoca un creciente alejamiento de sus militantes, disconformes con ese giro. Este proceso tiene un hito en 1987 durante el gobierno alfonsinista cuando las leyes de Punto Final y Obediencia Debida anulan las expectativas de justicia vinculadas con el juicio a las Juntas Militares, al tiempo que se agudiza el deterioro social como resultado de las medidas del Plan Austral de 1985. Este cuadro se combina con una transformación en el cuerpo de trabajadores sindicalizados debido a la desindustrialización que lleva a una preponderancia relativa de los gremios de comercio y servicios tradicionalmente menos combativos, dando por resultado un cierto repliegue de la participación sindical, aunque se mantiene la adhesión a las movilizaciones de la CGT en contra de las medidas de ajuste que comienzan a profundizarse.

Hacia fines de 1989, el retroceso en la participación política va a ser reforzado por la emergencia del menemismo que, al asumir el gobierno ese mismo año, plantea un tipo de liderazgo mesiánico y delegativo. La pasivi-

dad que alimenta el nuevo liderazgo se agudiza con el crecimiento de la atomización social, derivada del aumento de la desocupación y la creciente precarización de las condiciones de trabajo —al debilitar los ámbitos laborales como espacios de articulación política— y de una paulatina sustitución de la dinámica ciudadana en el espacio público por la política espectáculo difundida en los medios televisivos. A su vez, entre 1991 y 1994 se refuerzan formas indirectas de disciplinamiento sociopolítico gracias a una aparente recuperación económica, traducida en la estabilidad de precios que contrasta con la reciente hiperinflación o en el valor dólar de los salarios y la disponibilidad de créditos para consumo que facilitan la adquisición de artículos electrónicos y otros bienes durables. Estos nuevos consumos fueron presentados como evidencia del proceso de modernización en coincidencia con la ideología que se venía instalando desde Alfonsín. Pero el supuesto bienestar ocultaba una marcada degradación en las condiciones de vida de importantes segmentos de antiguos trabajadores lanzados a la pobreza y la indignancia en las tradicionales ciudades industriales del país.

A lo largo de los años noventa, mientras el internismo de los partidos políticos los aísla cada vez más de las necesidades de la población, el incremento de demandas sociales insatisfechas resultante de las sucesivas políticas de ajuste despierta preocupación en organismos como el BID y el BM, ante la eventualidad de un desborde reivindicativo que hiciera ingobernable la reciente democracia. En esa perspectiva se impulsa el desarrollo de organizaciones no-gubernamentales que funcionan como mediadoras entre los sectores carenciados y el gobierno para llevar adelante la gestión y administración de los programas sociales focalizados con financiamiento internacional. Las asociaciones civiles y las organizaciones no-gubernamentales conforman el llamado *tercer sector* y reivindican su carácter apolítico, centrando sus actividades en acciones comunitarias destinadas a paliar las carencias cotidianas, en especial, alimentación, salud y educación. Al estar dedicadas básicamente a tareas de asistencialismo, estas organizaciones resultaban funcionales al modelo económico en tanto tendían a descomprimir las tensiones generadas por el deterioro social; los reclamos sociales se van desvinculando de la actividad política que aparece como privativa de los representantes partidarios transformados en profesionales y especialistas. Pero la agudización de la crisis incrementa las necesidades y gran parte de estas asociaciones fueron encontrando límites en una acción orientada puntualmente a paliar las carencias cotidianas y se plantean la necesidad de articular redes con otros agrupamientos comunitarios en la búsqueda de soluciones más integrales. En esos mismos años, en distintos puntos del país surgen manifestaciones contra la corrupción en las instituciones políticas o la impunidad del poder, como fue-

ron las Marchas del Silencio por los asesinatos de adolescentes perpetrados desde estamentos del poder político o de las fuerzas de seguridad, las “puebladas”⁵ que cuestionan a los gobiernos locales corruptos, y protestas por la racionalización del personal de las empresas públicas que iban a ser privatizadas.

Las dirigencias sindicales oficialistas avalan las privatizaciones y la racionalización de esas empresas públicas en complicidad con el gobierno; este comportamiento produce una ruptura con los gremios enfrentados al menemismo, que en 1991 forman el Congreso de los Trabajadores Argentinos (CTA). Los principales sindicatos que lo integran son los de trabajadores del Estado y docentes de la educación pública, junto a diversas agrupaciones gremiales disidentes, asociaciones de pequeños y medianos empresarios industriales, comerciales y agrarios y algunos movimientos sociales. También en 1991, desde el campo político se desgaja un grupo de diputados del PJ que tiene relaciones con el CTA y protagonizan, a través de nuevas formas de lucha, las primeras confrontaciones con el gobierno nacional. Más tarde, ambos confluyen con otros desprendimientos partidarios y grupos independientes, conformando en 1993 el Frente Grande, cuyos objetivos principales eran la lucha contra el modelo económico neoliberal y la corrupción política. El Frente Grande genera una amplia expectativa y en 1994 se transforma en la segunda fuerza política del país; pero comienza a producirse una sustantiva reorientación en sus definiciones estratégicas y en las elecciones presidenciales de 1995 integra el Frepaso, que cambia su perfil originario. Por entonces se ha transformado en una fuerza claramente electoralista, neutralizando la participación de sus militantes territoriales y de las organizaciones sociales que lo habían integrado en sus inicios. En ese contexto, la mayoría del activismo social seguirá desarrollándose con perfiles políticos, pero cada vez más alejada de las estructuras partidarias existentes.

Como una continuidad en la lucha por los derechos humanos, en 1996 —a veinte años del golpe militar— nace el movimiento HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) conformado principalmente por jóvenes de padres desaparecidos. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo junto con otros organismos fueron ampliando su perspectiva al incorporar las nuevas generaciones de derechos humanos —derechos sociales, culturales, de autodeterminación de los pueblos— y desde sus inicios se mantienen como una incuestionada referencia moral para amplias capas de la

⁵ Se denominan “puebladas” a las manifestaciones de protesta que surgieron en algunas ciudades o pueblos del interior del país en las cuales participaron bajo distintas formas de lucha la gran mayoría de sus habitantes.

sociedad argentina. En estos años, la expresión más masiva entre los movimientos sociales que van emergiendo es la de los piqueteros, organizaciones de trabajadores desocupados cuya fortaleza crece a partir de 1996/1997 en el sur y el norte del país, extendiéndose poco después a la mayoría de los antiguos asentamientos urbanos en el Gran Buenos Aires. Los piqueteros adoptan nuevas modalidades de lucha y protesta utilizando la metodología de ocupación de calles, corte de rutas y marchas, combinadas con prácticas comunitarias para dar respuestas colectivas a sus necesidades cotidianas: creación de fábricas de materiales para construir sus casas, panaderías, huertas, comedores, centros de tercera edad, guarderías infantiles o lugares de apoyo escolar. Con estas dos formas de prácticas colectivas —crítica y resistencia unidas a tareas comunitarias— se va forjando una sociabilidad basada en valores de solidaridad y cooperación, en contraste con los del individualismo egoísta y la competencia propuestos por la ideología neoliberal.

A fines de los noventa se inician las primeras experiencias de ocupación de fábricas en quiebra o abandonadas por los propietarios, y que son ocupadas y puestas en funcionamiento por los trabajadores y técnicos despedidos, organizándose bajo formas autogestionarias en cooperativas o iniciativas mixtas con apoyo del Estado. La recuperación de fábricas cobra mayor fuerza desde 2001, dando cuenta de novedosas respuestas ante la destrucción del empleo y de la recreación de una sociabilidad que se inserta en el fortalecimiento de la participación democrática en otras áreas de la sociedad. En los últimos años ha comenzado la producción en más de 100 establecimientos: entre otros, el ingenio La Esperanza en Jujuy; la fábrica de cerámicas Zanón en Neuquén; la de tractores Zanello en Córdoba; el frigorífico Yaguané en La Matanza, la textil Brukman en Capital Federal, a las cuales se suman otros rubros como panificadoras, editoriales de arte, fábricas autopartistas, de acero o cristalerías. En casi todos los casos, las recuperaciones fueron precedidas por duros conflictos, cortes de ruta, manifestaciones y peleas judiciales en una iniciativa de los trabajadores que ha rebasado a las antiguas dirigencias sindicales.⁶

Finalmente, al calor de los hechos de diciembre de 2001 se constituye el movimiento de asambleas barriales como construcción social de carácter horizontal sin referentes o representantes formales, en donde se asumen las

⁶ Otra forma peculiar de respuesta a la crisis, desarrollada a partir de mediados de los noventa, es el crecimiento de la modalidad del trueque utilizando una moneda social —*el crédito*— que circula por fuera de los circuitos financieros como un espacio de redes autogestionadas. Asimismo, a partir de la incautación de los depósitos bancarios en diciembre de 2001 surge el movimiento de los ahorristas que cada semana reclaman frente a los bancos con formas novedosas de protesta.

propias prácticas colectivas como prácticas políticas y plantean una crítica radical a las formas institucionales existentes. A diferencia de los partidos de izquierda y también de los movimientos sociales identitarios o gremiales, las asambleas no se articulan alrededor de una clase, género o demanda puntual, ya que en ellas convergen una multiplicidad de componentes y motivos de reclamo. Como un rasgo peculiar de las asambleas, sus actividades abarcan tanto aspectos vinculados con la problemática nacional como cuestiones particulares propias de los barrios en los cuales están insertas. Los temas económicos, sociales, políticos o culturales abordados por sus integrantes se enriquecen gracias a la diversidad de saberes que intercambian comerciantes, profesionales, periodistas, docentes, artistas, amas de casa o antiguos militantes de los años setenta. Las diferentes asambleas se vinculan entre sí mediante comisiones interzonales de salud, de problemas legales o de ocupación de predios y participan de otras instancias de coordinación más amplias a nivel provincial y nacional. En sus prácticas han ido incorporando metodologías creadas por otros movimientos, como los *escraches* de la organización HIJOS en repudio a funcionarios corruptos, a instituciones monopólicas, a grandes supermercados, a laboratorios medicinales o a ciertos medios de comunicación masiva, y cortes de calles para ocupar el espacio público, siguiendo el método de los piqueteros. Han comenzado a desarrollar experiencias alternativas de gestión comunitaria —compras colectivas, clubes de trueque, huertas, censo de vecinos desocupados, bolsas de trabajo, comedores populares— en un proceso de creciente inserción con la problemática barrial, articulando su trabajo con otras organizaciones o instituciones como escuelas, hospitales, fábricas tomadas y similares. Las asambleas han alcanzado su mayor desarrollo en la Capital Federal, si bien se están extendiendo también a otras ciudades del interior del país. En los barrios más carenciados del Gran Buenos Aires tienen menor desarrollo, pero existe una articulación de redes barriales no sectoriales que coordinan las actividades entre asociaciones y centros comunitarios relacionados con temas de salud, educación, comedores, centros de tercera edad y otros problemas.

Tanto entre los piqueteros como en las fábricas ocupadas y en las asambleas se vienen ensayando distintos estilos de democratización en el debate y en la toma de decisiones colectivas que nutren formas contraculturales frente a los valores del neoliberalismo. Las fábricas tomadas por los trabajadores plantean alternativas al modelo vigente, ya que jerarquizan la cooperación en el trabajo humano y el pensamiento colectivo, evidenciando en los hechos el carácter parasitario del capitalista. Las asambleas y los piqueteros crean lazos sociales basados en la solidaridad, como un espejo invertido del individualismo egoísta, la competencia y la mercantilización de las relaciones.

Porque más allá de la heterogeneidad y las diferencias que exhiben entre sí estas experiencias, el elemento común que las caracteriza es la puesta en acto de nuevos valores.

La demanda *¡Que se vayan todos!* constituye otro aspecto de coincidencia, y su alcance se está definiendo al calor de un amplio y diversificado debate político. La contrapartida crítica a la democracia restringida es la búsqueda de nuevas formas de construcción democrática en la actividad política y en los más variados espacios de la sociedad. La condena a la corrupción en sus distintas manifestaciones y en particular la férrea decisión de oponerse a la represión policial y la impunidad, así como la idea de los derechos humanos y sociales básicos que hacen al concepto de ciudadano junto a la sensibilidad frente al hambre, va penetrando en el sentido común de la sociedad. Pero estas coincidencias básicas se expresan hasta el momento de modo fragmentario, sin alcanzar una vertebración suficiente que permita la acción conjunta de los nuevos protagonistas —conservando su diversidad y autonomía— frente a las estrategias del poder hegemónico. Sin duda, los tiempos requeridos para desarrollar y articular este heterogéneo conjunto de experiencias no coinciden con los cronogramas electorales. Porque es preciso profundizar el debate acerca de las modalidades de la acción política, las nuevas formas de democracia y el papel de las instituciones públicas en su relación con el Estado, el carácter de una ciudadanía plena, los potenciales vínculos horizontales entre estos movimientos en América Latina, dentro de un proceso de integración continental autónoma; todo ello en el marco de las transformaciones que se están procesando en el escenario internacional. Frente a estos desafíos, no es posible ignorar tampoco las tensiones derivadas del conflicto entre las prácticas innovadoras y la inercia de antiguos métodos de construcción política y social, de rivalidades y personalismos, de diferencias en los enfoques y tradiciones ideológicas que dan cuenta de la lucha entre lo viejo que no acaba de desaparecer y lo nuevo que no termina de nacer.

Algunas reflexiones finales

Si bien el colapso de la Argentina ha adquirido una especial magnitud, la crisis está afectando a la mayoría de las naciones de América Latina y excede lo estrictamente económico o financiero, extendiendo sus impactos a lo político, lo social y lo cultural. Una crisis orgánica que impone duras interrogantes acerca de la viabilidad del capitalismo en esta región; y, a su vez, se vertebra con la desestabilización económica y financiera en el propio corazón del imperio, como manifiestan los escándalos de Enron, Worldcom, Xe-

rox, IBM, Citibank o las auditoras Andersen y Merrill Lynch. En este contexto, la administración Bush reivindica ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el unilateralismo inaugurado en 1823 con la Doctrina Monroe, planteando el derecho de enviar tropas estadounidenses a cualquier lugar del planeta sin necesidad de aprobación de la ONU. Esta actitud se reflejaría poco más tarde en el desconocimiento del Tribunal Penal Internacional creado por el Estatuto de Roma, en tanto que están dispuestos a garantizar la inmunidad de los militares norteamericanos; e igualmente en la negativa a suscribir el protocolo de Kyoto, ya que algunos resguardos de protección ambiental condicionaban las explotaciones petroleras e industriales, fuertemente vinculadas con los intereses empresarios de la familia presidencial. Los atentados del 11 de septiembre exacerbaban ese unilateralismo, reforzando los fundamentos que supuestamente legitiman la lucha contra el terrorismo en cualquier lugar del planeta: del total del gasto mundial destinado a defensa (una suma de 800 000 millones de dólares) cerca del 50% corresponden a Estados Unidos, ubicándolo en un incuestionado primer lugar. (Verbitsky, 2002)

Con referencia a las estrategias hacia el continente latinoamericano es posible detectar dos áreas principales que tienen una estrecha relación entre sí: la económico-financiera y la militar. En el campo económico, el núcleo central lo constituyen las presiones ejercidas sobre las distintas naciones para incorporarlas en un Área de Libre Comercio de las Américas. El ALCA intenta reproducir las normas que desde 1993 rigen las relaciones económicas de Estados Unidos con Canadá y México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). El tratado pretende ignorar las soberanías nacionales al establecer un sistema de arbitraje privado para dirimir controversias entre inversores extranjeros y gobiernos, estableciendo que cualquier decisión de un país que afecte los beneficios potenciales de una empresa se considera equivalente a una expropiación. Todo indicaría que, ante cualquier conflicto, los arbitrajes internacionales no van a actuar precisamente en favor de los países más débiles. Considerando que para Estados Unidos el ALCA es la mejor solución, desde comienzos de los años noventa la táctica ha sido practicar tratados bilaterales con Chile, Argentina e incluso Uruguay con el fin de aislar a Brasil, cabeza de la resistencia frente a ese acuerdo destinado a consagrar una desigualdad irreversible y cada vez más pronunciada entre socios que están demasiado lejos de ser iguales. Los gobiernos de Menem y De la Rúa, en particular bajo las influencias del Ministro de Economía Domingo Cavallo, favorecieron esas políticas norteamericanas saboteando al Mercosur en forma sistemática y consciente. Dados estos antecedentes, es posible afirmar que la dureza mostrada por el FMI ante la crisis argentina tiene objetivos económicos y políticos de carácter estratégico. No están dispuestos a brindar

ayuda por temor a un “contagio” susceptible de producir un desequilibrio regional; se trata de presionar a nuestro país con el objetivo de esterilizar al Mercosur y aislar a Brasil ante el crecimiento político del Partido de los Trabajadores. Argentina estaría destinada a seguir cumpliendo un importante papel desestabilizador de las políticas de integración regional autónoma, donde se combinan un sabotaje al Mercosur con el eventual ingreso de las fuerzas armadas al Plan Colombia, en una clara subordinación a las estrategias militares de los Estados Unidos. Esto permitiría imponer un disciplinamiento en América Latina mediante algún tipo de salida autoritaria que los habilite para continuar extendiendo la lucha contra el terrorismo a escala mundial, otorgando un alcance excesivamente amplio al concepto de *terrorismo*. El Plan Colombia podría adquirir así una contundencia mucho mayor, actuando como una reedición bajo nuevas formas del tristemente célebre Plan Cóndor.

Oponiéndose a estas nuevas estrategias de control a escala continental, a las dramáticas consecuencias de los modelos neoliberales y a la crisis de representatividad de los partidos, en América Latina está surgiendo una amplia gama de organizaciones sociales y políticas. Con mayor o menor intensidad, estas expresiones formulan un cuestionamiento global al dominio de los Estados Unidos aliado con los poderes locales, y las críticas abarcan el campo económico-financiero, el sistema de representación política así como los valores culturales, esbozando los lineamientos de sociedades diferentes. La crítica no implica el rechazo a la democracia en sí, sino a los simulacros resultantes de las formas representativas desplegadas en la mayoría de los países del continente. En tal sentido, el líder cocalero boliviano Evo Morales, señala:

Latinoamérica está ardiendo, no porque los pueblos quieran que arda, sino por la agresión del modelo. Va a haber muchos cambios por cierto, no sólo desde un punto de vista indígena campesino... La pregunta es hasta cuándo van a decidir por nosotros. Por eso mismo es que hay una gran confrontación cuando hablamos de democracia. Queremos una democracia donde nosotros podamos decidir, no la que no cambia nada. Para poder recuperar el pensamiento de servir al pueblo no hay otra alternativa que lograrlo con una asamblea popular constituyente que para nosotros es una refundación del país, donde haya nueva patria, nuevo Estado... Sólo los pueblos pueden decidir sobre su futuro. (Clarín, 2000)

Durante las últimas décadas asistimos a una amplia diversidad de manifestaciones que buscan transformar radicalmente estas sociedades basadas en la subordinación nacional, en la concentración de la riqueza y en procesos de exclusión social. Dentro de esta gran heterogeneidad, algunos movimientos sólo se ocupan de paliar carencias, otros se plantean la posibilidad de llegar al poder y en algunos casos se proponen crear formas de autonomía,

casi como estados paralelos que les permitan desarrollar una acción comunitaria sin interferencia de los gobiernos nacionales. Diversas experiencias han dado como fruto, desde gobiernos locales, formas de democracia participativa, entre las cuales tal vez el municipio de Porto Alegre sea el ejemplo más significativo. En otros lugares los movimientos sociales actuaron como motores o muros de contención frente al avance del capital concentrado: ciudadanos costarricenses rechazaron la privatización de la empresa nacional de energía; en Perú, manifestaciones de repudio evitaron la privatización del sistema de gas y de energía eléctrica en el departamento de Arequipa; los campesinos bolivianos impidieron la privatización del sistema de agua y los mineros lograron la reestatización de la explotación de minerales. Los indígenas ecuatorianos crearon su propio parlamento y universidad; el Movimiento de los Sin Tierra de Brasil reivindica el derecho a la disposición de tierras para los desposeídos.

Las múltiples manifestaciones de oposición a la supremacía neoliberal en América Latina están sentando las bases de una confrontación en profundidad, referida en última instancia a los valores fundantes a partir de los cuales se formulan las propuestas para superar la crisis. No se trata simplemente de una reorientación de las políticas económicas y sociales o de un mero recambio partidario en la conducción del Estado. Estamos ante una disyuntiva donde se enfrentan las pautas hasta ahora hegemónicas como fundamento de la concentración de la riqueza y la polarización social en nombre del individualismo y el lucro, frente a la creación de nuevas alternativas de democratización social construidas alrededor de la cooperación y la solidaridad. En este contexto, el periodo que atraviesa Argentina da cuenta de un debate político-cultural entre las nuevas expresiones democratistas y los grupos tradicionales de poder con sus voceros que pretenden recomponer una hegemonía ideológica hostigada. La gran interrogante planteada por la actual situación de nuestro país es el potencial comportamiento del grueso de las clases medias que, ante una situación de grave deterioro de sus condiciones de vida y la clausura de expectativas hacia el futuro, pueden volcarse hacia prácticas solidarias de articulación con los sectores populares o jugar como base social de un partido del orden de rasgos fascistoides. No debe olvidarse que las clases medias resentidas fueron la principal base social del nazismo en Alemania o del fascismo en Italia. En el caso argentino, el tema de la inseguridad debido a los temores que despierta el incremento del delito es tratado por los medios de comunicación con una perspectiva que busca criminalizar la pobreza. De esta manera se intenta gestar un consenso alrededor de la necesidad de convocar nuevamente una salida autoritaria y al mismo tiempo abrir una brecha susceptible de enfrentar a importantes franjas sociales medias y bajas que están tendiendo a articularse en torno a la definición de op-

ciones conjuntas. Por su parte, también en el amplio espectro de la pobreza se libra una batalla entre aquéllos que buscan formas colectivas de superación de la crisis, mientras la desesperación puede volcar a otros hacia comportamientos clientelísticos que también pueden ser funcionales a un partido del orden. Es por ello que la actual encrucijada argentina supone un corte histórico, en tanto que las alternativas en confrontación marcan caminos hacia sociedades muy disímiles entre sí.

Recibido: octubre, 2002

Revisado: diciembre, 2002

Correspondencia: Alcira Argumedo/República de la India 2929 7° A/(1425) Capital Federal/Argentina/Tel.: (5411) 48 02 18 22/correo electrónico: alciraar@ciudad.com.ar; Aída Quintar/Armenia 2265 1° Piso Dto. 8/(1425) Capital Federal/Argentina/Tel.: (5411) 48 32 27 10/correo electrónico: aidaquintar01@hotmail.com

Bibliografía

- Argumedo, Alcira (2002), "La restauración conservadora y el colapso argentino", *Ciudadanos. Revista de crítica política y propuestas*, año 2, núm. 5, Otoño, Buenos Aires.
- (2001), "Argentina: los desafíos de un nuevo tiempo histórico", *Ciudadanos. Revista de crítica y propuestas*, año 2, núm. 2, Verano, Buenos Aires
- (1999), "Integración continental autónoma o globalización: las alternativas de América Latina", *Nación y Mercado*, Buenos Aires, Biblioteca del Congreso de la Nación.
- Argumedo, Alcira (1987), *Un horizonte sin certezas: América Latina ante la revolución científico-técnica*, Buenos Aires, Ed. Puntosur/ILET.
- Azpiazu, Daniel y Eduardo Basualdo (1990), *Cara y contracara de los grupos económicos: Estado y promoción industrial en la Argentina*, Buenos Aires, Cántaro.
- Azpiazu, Daniel, Eduardo Basualdo y Miguel Khavisse (1986), *El nuevo poder económico en la Argentina de los años ochenta*, Buenos Aires, Legasa.
- Basualdo, Eduardo (1992), *Formación de capital y distribución del ingreso durante la desindustrialización*, Buenos Aires, Idep/Ate.
- Beccaria, Luis (1995), *Cambios en la estructura distributiva*, Buenos Aires, UNICEF.
- INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) (2002), *Encuesta Permanente de Hogares*, Buenos Aires.
- (1984), *La pobreza en la Argentina. Indicadores de necesidades básicas insatisfechas a partir de los datos del Censo Nacional de Población y Viviendas de 1980*, Buenos Aires, Instituto Nacional de Estadística y Censos.

- Jubileo 2000 (2001), *Revista del Servicio de Paz y Justicia*, Buenos Aires.
- Juliá, Carlos (comp.) (2002), *La memoria de la Deuda: una deuda con la memoria*, Buenos Aires, Editorial Biblos.
- Lozano, Claudio (2002), *La Catastrofe Social*, Buenos Aires, Informe IDEP-CTA.
- Minujin, Alberto (1985), *La pobreza en la Argentina*, Buenos Aires, INDEC.
- Nun, José (2000), *Democracia ¿gobierno del pueblo o gobierno de los políticos?*, Buenos Aires, FCE.
- Periódico Clarín* (2002), varios números.
- Periódico Página 12* (2002), varios números.
- Quintar, Aída (2002), "Acerca de las prácticas colectivas de las asociaciones locales", en Luciano Andrenacci (org.), *Cuestión social y política social en el Gran Buenos Aires*, Buenos Aires, Ediciones Al Margen/Instituto del Conurbano/Universidad Nacional de General Sarmiento.
- (1990), "Flexibilidad laboral. ¿Requerimiento de las nuevas tecnologías o fragmentación del movimiento obrero?", *Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales*, núm. 118, vol. 30, julio-septiembre.
- Quintar, Aída (1989), *La flexibilización laboral: Una nueva modalidad de fragmentación de los sectores obreros*, Buenos Aires, ILPES/CEPAL.
- Quintar, Aída y Alcira Argumedo (2000), "Argentina: os dilemas da democracia restringida", *Lua Nova. Revista de Cultura e Política*, núm. 49.
- Quintar, Aída y Tomás Calello (2002), "Prácticas colectivas populares en la región metropolitana de Buenos Aires. ¿Indicios de nuevas formas de pensar-hacer política?", en Adriana Rofman (comp.), *La acción local de las organizaciones sociales de base territorial*, Buenos Aires, Instituto del Conurbano/Universidad Nacional de General Sarmiento/IDEP de la Central de Trabajadores Argentinos.
- Verbitski, Horacio (2002), en *Página 12*, 28 de abril.